



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Mesa V

78546/2019 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. ANT. R.A. 359/2019-7236

6273

78547/2019 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

78548/2019 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO (MINISTERIO PÚBLICO)

78549/2019 JEFA DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA DELEGACIÓN POLÍTICA DE TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

78550/2019 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA DELEGACIÓN DE TLALPÁN (AUTORIDAD RESPONSABLE) SE REMITEN DOS LEGAJOS DE PRUEBAS.

78551/2019 DIRECTOR JURÍDICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA DELEGACIÓN POLÍTICA DE TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

78552/2019 DIRECTOR DEL SECTOR PADIERNA DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA DELEGACIÓN DE TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

78553/2019 PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

78554/2019 TITULAR DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

78555/2019 NOTIFICADOR ÁNGEL CÉSAR FONSECA BÁRCENA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN ESTA CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE)

78556/2019 ARTURO MAYA ESPINOZA EN SU CARÁCTER DE JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EJECUCIONES Y SANCIONES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN ESTA CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE)

78562/2019 ALCALDE DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN ESTA CIUDAD.

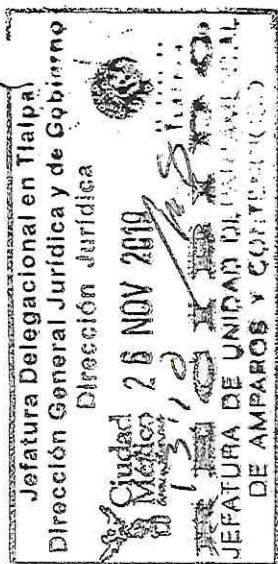
En los autos del Juicio de Amparo 1265/2017, promovido por [REDACTED] contra actos de Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

" Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1265/2017 en dos tomos, dos legajos de pruebas y testimonio de la resolución dictada en sesión de doce de noviembre del año en curso, relativo al recurso de revisión R.A. 359/2019-7236, con nueve copias; en tal virtud, acúsese el recibo de estilo y comuníquese a las partes que el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED] por las razones y para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria".

Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo



17-00



del envío de los presentes autos, no así las que obren en copia fotostática, toda vez que las mismas ya forman parte del cuaderno principal.

Asimismo, glósese únicamente el original del incidente de suspensión 1265/2017, toda vez que el duplicado será destruido; sin embargo, deberá de acompañarse al presente juicio de amparo.

En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan, en esta Ciudad, para que dé cumplimiento a la resolución dictada por la superioridad, remitiendo copia certificada, completa y legible de todas de las constancias que así lo acrediten, es decir, en los términos siguientes:

"En consecuencia al resultar esencialmente fundados los agravios del quejoso ahora recurrente principal, lo conducente es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan deje insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo 020/RPDP/17 a partir del emplazamiento realizado en las diligencias de diez, once, veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, respecto de los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, incluida la ejecución de la orden de desalojo y lanzamiento llevados a cabo el catorce de septiembre de dos mil diecisiete respecto de los referidos predios y cualquier otro acto posterior al emplazamiento, y restituya al quejoso en el goce del derecho del bien inmueble en cita, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación".

En estas condiciones, y toda vez que esta Juzgadora tiene la obligación de vigilar que las ejecutorias de amparo queden debidamente cumplimentadas en los términos que fueron pronunciados, por ser de orden público, se requiere al Alcalde de la alcaldía de Tlalpan, en esta Ciudad, como superior jerárquico de la autoridad responsable de dicho Instituto para que realice los trámites necesarios para dar cumplimiento a los lineamientos antes establecidos; asimismo, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, para que ordene a su subordinado a cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le hará efectivo un apercibimiento igual al señalado para la autoridad responsable, además que incurrirá en la misma responsabilidad.

Se apercibe a las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que, en caso de ser omisas ante este requerimiento, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto por el artículo 258 y se continuará el procedimiento previsto en el normativo 192, consistente en la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público, de conformidad con lo previsto por el artículo antes precisado, en relación con el 267 fracción I, ordenamientos todos, de la Ley de Amparo.

Contenido de los preceptos legales que establecen:

"Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado.

Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.

Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo.

Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días.

Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:

Por otra parte, dado que ya no son necesarias las copias certificadas relativas al procedimiento administrativo 020/RPDP/2017 y TLP/DJ/SVR/VA-EM/382/2015, que remitió el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan, en esta Ciudad, hágase la devolución correspondiente y sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo dado que no se tratan de originales.

Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

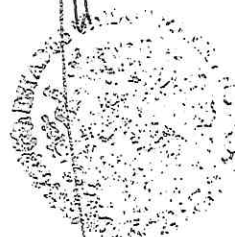
Lo proveyó y firma la Licenciada Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ante la Secretaria Alejandra Guadalupe Pérez Cerisola, quien autoriza. Doy fe.

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales conducentes.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa
en la Ciudad de México

Alejandra Guadalupe Pérez Cerisola



JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



R.A. 359/2019-7236

QUEJOSO Y RECURRENTE: ENRIQUE ESTRADA LABASTIDA

RECURRENTE EN ADHESIVA: PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADO PONENTE:
LIC. JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO

SECRETARIA:
LIC. MARIANA AGUILAR AGUILAR

Ciudad de México. Acuerdo del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve.

**VISTOS; y,
RESULTANDO:**

PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México [REDACTED] por propio derecho, promovió demanda de amparo contra las autoridades y los actos que a continuación se indican:

"III. Autoridades Responsables --- A. Como autoridades ordenadoras señalo: --- 1. Jefa Delegacional del Gobierno de la Ciudad de México en la Delegación Política de Tlalpan, (...). --- 2. Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, (...). --- B. Como autoridades ejecutoras: --- 1. Director General Jurídico y de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad de México en Delegación de Tlalpan, (...). --- 2. Director Jurídico, del Gobierno de la Ciudad de México en la Delegación de Tlalpan, (...). --- 3. Director del Sector Padierna de la Policía Preventiva de la Delegación Tlalpan, (...). --- IV. ACTOS RECLAMADOS --- De las autoridades ordenadoras antes precisadas reclamo la ejecución indebida y arbitraria del que mandan a ejecutar la 'recuperación' de la vía pública y 'recuperación de terreno' a favor de la Delegación Política en Tlalpan. Así como orden de lanzamiento demolición, de las autoridades ordenadoras y ejecutoras ya indicadas en los incisos A. y B., de la presente demanda, reclamo la ejecución física e indebida e inescrupulosa, por el cual, valiéndose de la fuerza pública y supuestos empleados del órgano político en Tlalpan, se han valido de una supuesta recuperación de vía pública fin (sic) de apoderarse en forma barbarie (sic) de mi propiedad, a sabiendas de lo que conlleva legal y extrajudicialmente sus acciones más que arbitrarias, sustrayendo también unidad de grúa de transporte, propiedad de Moisés O. (sic) Gutiérrez Ramírez, etc. (sic) así como ocupando indebidamente mi propiedad, negándome el paso y el libre ejercicio de mis derechos, negando toda información de sus acciones más que cuestionables, y negándose a identificarse, con el fin de seguir cometiendo su furtividad, así como negando la información de transparencia a que tiene derecho el ciudadano, únicamente se valen de evadirse de su responsabilidad, trasladando sus responsabilidades a otros empleados y/o funcionarios; así también los supuestos funcionarios y/o empleados han amenazado con regresar a demoler las construcciones que se encuentran en el

interior de la propiedad del aquí impetrante y materia del presente amparo que se ubica en Carretera Picacho Ajusco, Manzana 90, lotes dos y tres de la colonia Lomas de Padierna (fracciones pequeñas de terreno colindantes a la tienda 'Bodega Alianza') en la Delegación de Tlalpan de esta ciudad capital."

SEGUNDO. El quejoso señaló como vulnerados en su perjuicio los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, narró los antecedentes del acto reclamado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como tercero interesado a [REDACTED]

TERCERO. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a la Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la que, en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la registró con el número de expediente 1265/2017 y formuló algunos requerimientos al quejoso.

En escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso señaló como nuevo acto reclamado y como autoridades responsables a los siguientes:

"(...) acto reclamado la sustracción del vehículo de transporte, marca Dodge color rojo, con rótulos de 'Grúas Moy', dicho acto se lo reclamo en concreto directamente a elementos de la policía preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, y al personal del 'Director Jurídico', dependiente del 'Director General Jurídico y de Gobierno del órgano político en la Delegación de Tlalpan', y de la Jefa Delegacional del Gobierno de la Ciudad de México, en Tlalpan."

CUARTO. Desahogados los requerimientos, en proveído de veinticuatro de octubre siguiente, la juez del conocimiento admitió a trámite la demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y no tuvo como tercero interesado al que señaló el quejoso.

QUINTO. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso amplió su demanda de amparo, en la que señaló como autoridades demandadas y actos reclamados los siguientes:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES. --- Procurador o Procurador General, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, (...). --- Titular de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, (...). --- IV. ACTOS RECLAMADOS. --- 1. De las autoridades antes señaladas, reclamo la supuesta 'colocación y resguardo de sellos de seguridad' en los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, de la Delegación de Tlalpan de esta ciudad, ya que como se encuentra acreditado en autos del principal, no existen supuestos sellos de seguridad, ya que las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda de garantías llevaron a cabo el lanzamiento arbitrario mediante el uso de la fuerza pública y hacen uso y ocupan el terreno del desposeimiento como si fuera su casa, a sabiendas de la corrupción, arbitrariedad y bandidaje en el cual han incurrido, ya que como se encuentra acreditado en autos del principal, las autoridades responsables se encuentran plenamente involucradas al tratar de apoderarse de lo ajeno, con el

pretexto de una supuesta recuperación de predio, pues resulta infantil (sic) y absurdo que las autoridades del órgano político en la Delegación de Tlalpan, en especial al Director General Jurídico, y con fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, resolvió procedente la recuperación de predio en el procedimiento administrativo 020/RRDP/2017. --- Plenamente resulta verídico que las autoridades administrativas en la Delegación de Tlalpan, han incurrido en un acto de corrupción a todas luces doloso, ya que, al supuestamente resolver la dolosa recuperación de predio, omitieron de mala fe y pasaron por encima de los planos y de alineamientos y derechos de vía, por los cuales tienen acceso directo y por los cuales se hayan plenamente informado de la debida identidad de los lotes de desposeimiento y materia del presente amparo, y ahora con el dictamen de ingeniería topográfica, emitido por el perito oficial de la Procuraduría General de la República, se le demostró a las autoridades responsables y se les hizo recordatorio profundo de la debida identidad de los lotes que indebidamente pretenden apropiarse, pues consideró que las acciones ejecutadas por las autoridades responsables, al resolver sobre una supuesta 'recuperación de predio', y en caso de que existiesen sellos colocados por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, se acreditaría la violación de sellos, y la responsabilidad penal por ese hecho, el caso es que desde que el suscrito quejoso entró en posesión de los lotes materia del presente amparo, y bajo protesta de decir verdad, no existían sellos de seguridad colocados por orden de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad."

Previo requerimiento, en acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la secretaria en funciones de juez de distrito admitió a trámite la ampliación de demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

SEXTO. En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, la secretaria en funciones de juez de distrito requirió al quejoso para que manifestara si era de su interés ampliar la demanda y señalar como acto reclamado el emplazamiento en el procedimiento del expediente administrativo 020/RPDP/17 y como autoridad responsable al notificador Ángel César Fonseca Bárcenas adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la Alcaldía de Tlalpan.

Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil diecinueve, el quejoso nuevamente amplió su demanda y señaló como actos reclamados y autoridades responsables a los siguientes:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES: --- a. Notificador César Fonseca Bárcena (sic), **adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan, (...).** --- **b. Ejecutor, Arturo Maya Espinoza, como Jefe de la Unidad Departamental de Ejecuciones y Sanciones adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, (...).** --- **IV. ACTOS RECLAMADOS: --**
- **a. Del notificador César Fonseca Bárcena (sic), le reclamo la arbitraria, ilegal, corrupta y supuesta notificación y/o emplazamiento dentro del procedimiento administrativo 020/RPDP/2017, ya que como se encuentra acreditado en autos, este servidor público, actuando de manera inescrupulosa sin observar los procedimientos de la notificación ordenados en la ley del procedimiento administrativo, incurrió en informes falsos de toda falsedad, a fin de sembrar un procedimiento ajeno en agravio de tercero, aquí quejoso, ya que los vigilantes que**

resguardaban en la caseta de vigilancia que se encuentra al fondo de los lotes materia del presente juicio, omitiendo dejar algún requerimiento, citatorio, o aviso pegado en la puerta, etc. (sic), en el que se hiciera del conocimiento el supuesto procedimiento administrativo, en su caso por el cual ese servidor público, hubiese aportado prueba fehaciente, por el cual acreditara que haya acudido al domicilio de los lotes hoy desposeídos, sin embargo como se desprende en los tomos de pruebas de la Alcaldía de Tlalpan, en la especie no sucede. --- b. Del ejecutor Arturo Maya Espinosa, le reclamo la ilegal, arbitraria y corrupta ejecución de la diligencia del día catorce 14 de septiembre de 2017 de dos mil diecisiete, de la supuesta 'recuperación de predio' del procedimiento administrativo 020/RPDP/2017, por el cual, a fin de llevar adelante dicha diligencia y de manera inescrupulosa ordenó el desalojo de la parte y superficie de terreno que corresponden a los lotes numerados oficialmente como dos y tres de la Manzana 90 noventa de la colonia Lomas de Padierna de la Delegación de Tlalpan, hoy Alcaldía del mismo nombre de esta ciudad."

Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, la secretaria encargada del despacho admitió a trámite la ampliación de demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

SÉPTIMO. Seguida la secuencia procesal, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve la secretaria en funciones de juez de distrito celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó sentencia terminada de engrosar el veinticinco de junio siguiente, en la que resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos cuarto y sexto de la presente resolución por las razones ahí expuestas. --- SEGUNDO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Enrique Estrada Labastida, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el último considerando de esta resolución, por los motivos señalados en el mismo."

OCTAVO. Inconforme con la sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer a este tribunal colegiado, el que mediante acuerdo de presidencia de cinco de agosto de dos mil diecinueve, lo registró con el número R.A. 359/2019-7236 y lo admitió a trámite.

NOVENO. Por oficio presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, el Delegado de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, en representación de ésta, interpuso recurso de revisión adhesiva, el cual se admitió en acuerdo de doce de agosto siguiente.

DÉCIMO. Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se turnó el asunto al magistrado José Ángel Mandujano Gordillo para los efectos de los artículos 183 de la Ley de Amparo y 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, último párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84 de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción I, del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en razón de que se interpuso contra una sentencia dictada por una juez de distrito que reside en el circuito en el que este tribunal colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. El recurso de revisión principal fue interpuesto dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida le fue notificada al recurrente por medio de lista el nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 1297 del tomo II del juicio de amparo) y su escrito de expresión de agravios lo presentó el dieciocho de julio siguiente; el plazo referido transcurrió del once al veinticuatro de julio del año en cita, sin contar en el cómputo los días diez —en que surtió efectos la notificación—, trece, catorce, veinte y veintiuno de julio de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

A su vez, el recurso de revisión adhesiva se presentó en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el seis de agosto de dos mil diecinueve; y la notificación de la admisión del recurso de revisión principal le fue notificada a la autoridad recurrente en adhesiva el seis de agosto siguiente (folio 19 de este tomo), por lo que la interposición del recurso de revisión adhesiva resulta oportuna aunque se haya presentado antes de la notificación del acuerdo de admisión del recurso de revisión principal.

Resulta aplicable, la tesis 1a. CCXXXI/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, tomo I, página 508, cuyos título, subtítulo y texto son los siguientes:

“RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL. En términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, la regla general para la presentación del recurso de revisión adhesiva es que deberá hacerse dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de la admisión del recurso principal. Sin embargo, de los numerales 21 y 22 de la ley referida, y aplicados análoga y sistemáticamente con el artículo 82 aludido, se concluye que si el recurrente adhesivo interpone el recurso de mérito antes de que le hubiere sido notificado el acuerdo de admisión del principal, no puede considerarse extemporáneo; máxime que la propia ley reglamentaria no dispone prohibición alguna al respecto, ni señala que por esta condición el medio de defensa sea inoportuno.”

TERCERO. El recurso de revisión principal se promovió por parte legitimada ya que Enrique Estrada Labastida lo hizo por propio derecho y tiene reconocido el carácter de quejoso en el juicio de amparo indirecto de donde emana la sentencia recurrida.

Asimismo, el recurso de revisión adhesiva se promovió por parte legitimada, ya que la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México lo hizo por conducto de Adrián Cuevas

González, quien tiene reconocido el carácter de delegado en términos del artículo 9o., primer párrafo, de la Ley de Amparo (foja 919 del juicio de amparo), por lo que tal representación surte efectos en este asunto.

CUARTO. El recurso de revisión principal es procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ya que el quejoso recurrente lo interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional y lo que pretende es obtener un mayor beneficio.

Por su parte, el recurso de revisión adhesiva es procedente en términos del artículo 82 de la Ley de Amparo.

QUINTO. La sentencia recurrida se apoyó en las siguientes consideraciones:

“PRIMERO. Competencia. (...) --- SEGUNDO. Aplicación de la jurisprudencia emitida en relación a la Ley de Amparo abrogada. (...) --- TERCERO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es importante precisar que del estudio integral de la demanda de amparo y de la causa de pedir, se deduce que los actos reclamados consisten en: --- I. El emplazamiento realizado en el procedimiento administrativo número 020/RPDP/2017, que se actualiza a través de las siguientes actuaciones: --- 1. El oficio número DT/DGJG/5889/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el expediente administrativo número 020/RPDP/2017, por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, mediante el cual se requirió al o los ocupantes, poseedores, tenedores o responsables de la posesión del predio ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, predio localizado en las coordenadas que ahí se especifican, para que en el término de cinco días acreditara o acreditaran ante ese órgano político, mediante justo título, la calidad en la que se encuentra o encuentran en posesión del citado predio, con justo título, o en su caso de no contar con justo título, proceda o procedan a la devolución del mismo, apercibido o apercibidos que de no hacerlo, se iniciaría el procedimiento de recuperación de predio de dominio público (foja 28 del primer legajo de pruebas). --- 2. El citatorio de diez de agosto de dos mil diecisiete relativo a la notificación del oficio DT/DGJG/5889/2017 de nueve del mismo mes y año, signado por Ángel César Fonseca Bárcenas, notificador adscrito a la Dirección Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, actualmente Alcaldía Tlalpan (foja 31 del primer legajo de pruebas). --- 3. Instructivo de once de agosto de dos mil diecisiete, signado por el verificador señalado en el numeral que antecede, relativo a la notificación del oficio DT/DGJG/5889/2017 (foja 32 del primer legajo). --- 4. El acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete dictado en el expediente administrativo 020/RPDP/17, por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, en el que se hizo efectivo el apercibimiento dictado en el diverso oficio de nueve del mismo mes y año, determinando iniciar el procedimiento de recuperación del predio del dominio público ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, con las coordenadas que ahí se especifican, citando a los ocupantes y/o poseedores, y/o tenedores, y/o responsables de la posesión del predio citado a la audiencia de ley, de

ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos (fojas 33 y 34 del primer legajo de pruebas). --- 5. El citatorio de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete relativo a la notificación del auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente administrativo 020/RPDP/17, signado por Ángel César Fonseca Bárcenas, notificador adscrito a la Dirección Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, actualmente Alcaldía Tlalpan (foja 36 del primer legajo de pruebas). --- 6. Instructivo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, signado por el verificador señalado en el numeral que antecede, relativo a la notificación del auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente administrativo 020/RPDP/17, (foja 37 del primer legajo). --- II. La emisión y ejecución por parte de las autoridades ordenadoras, esto es, de la Jefa de la Alcaldía Tlalpan y del Secretario de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México de la orden de desalojo y lanzamiento llevados a cabo el catorce de septiembre de dos mil diecisiete de los predios que por esta vía defiende el quejoso, ubicados en Carretera Picacho Ajusco, Manzana 90, lotes dos (2) y tres (3) de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, contenida en la resolución de once de septiembre del mismo año, emitida por el Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan (fojas 77 a 82 del primer legajo). --- III. La emisión de la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete en el expediente 020/RPDP/2017, por el Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan. --- IV. La ejecución de la orden de desalojo y lanzamiento precisadas en el párrafo que antecede, así como la demolición de algunas estructuras que se encontraban en los predios mencionados por parte de las responsables ejecutoras Director General Jurídico y de Gobierno, Director Jurídico, ambos de la Alcaldía Tlalpan, y del Director del Sector Padierna de la Policía Preventiva de esa Alcaldía, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y de Arturo Maya Espinoza, Jefe de la Unidad Departamental de Ejecuciones y Sanciones adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, misma que tuvo verificativo mediante diligencia de catorce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 87 y 88 del primer legajo de pruebas). --- V. La sustracción del vehículo de transporte marca Dodge color rojo con rótulos de 'Grúas Moy', llevada a cabo en la diligencia señalada en el numeral que antecede por elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, adscritos a la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, y al personal del Director Jurídico dependiente del Director General Jurídico y de Gobierno, y de la Jefa de la Alcaldía Tlalpan. --- VI. La 'colocación y resguardo de sellos de seguridad' en los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, de la Alcaldía Tlalpan de esta Ciudad, por parte del Procurador General de Justicia y del Titular de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos de la Ciudad de México. --- CUARTO. Inexistencia de actos. Por técnica jurídica procede el estudio de la existencia o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia XVIII.2o. J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, cuyo rubro dice: --- 'ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. (se transcribe).' --- No son ciertos los actos reclamados a la Jefa de la Alcaldía Tlalpan y al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

(en su denominación correcta), consistentes en la emisión y ejecución de la orden de desalojo y lanzamiento llevados a cabo el catorce de septiembre de dos mil diecisiete de los predios que por esta vía defiende el quejoso, ubicados en Carretera Picacho Ajusco, Manzana 90, lotes dos (2) y tres (3) de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, ordenadas en el expediente administrativo 020/RPDP/17, mediante resolución de once del mes y año citados, así como en la sustracción del vehículo de transporte marca Dodge color rojo, con rótulos de 'Grúas Moy', pues así lo señalaron al rendir sus informes justificados (fojas 176 a 183; 239 a 243); negativa que se corrobora de las copias certificadas de lo actuado en dicho expediente en un legajo por separado, pues de las mismas se desprende que dicha resolución fue emitida por el Director General Jurídico y de Gobierno de Tlalpan (fojas 77 a 82 del primer legajo de pruebas), y su ejecución fue practicada por el Jefe de la Unidad Departamental de Ejecución de Sanciones de la Subdirección de Verificación y Reglamentos de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan en conjunto con servidores públicos adscritos a las Direcciones Generales de Administración, Participación Ciudadana y de Servicios Urbanos, así como personal operativo, vehículos y maquinaria utilitarios de la Alcaldía citada, y diversos oficiales de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esa Alcaldía (fojas 87 y 88). --- Por otra parte, el Director Jurídico de la Alcaldía Tlalpan al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye consistente en la ejecución de la orden de desalojo y lanzamiento precisadas en el párrafo que antecede, así como la demolición de algunas estructuras que se encontraban en los predios mencionados (fojas 176 a 183), negativa que se corrobora de la lectura del acta de ejecución de la resolución de once de septiembre de dos mil dieciocho, pues como se advierte del párrafo anterior, quienes participaron en su ejecución fueron diversas autoridades. --- Tampoco son ciertos los actos reclamados al Procurador General de Justicia y al Titular de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos de la Ciudad de México consistente en la 'colocación y resguardo de sellos de seguridad' en los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, de la Alcaldía Tlalpan de esta Ciudad, por parte del Procurador General de Justicia y del Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (en su denominación correcta), ambos de la Ciudad de México, pues así lo (sic) al rendir sus informes justificados (fojas 917 a 918; 1132 a 1134). - -- Cabe precisar que mediante oficio ingresado en la oficialía de partes de este juzgado el doce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 872), el apoderado legal de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México remitió el oficio número PACDMX/59/2385/2018 que (sic) con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento formulado en fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho dictado en este juicio de amparo, le informaron a través de los oficios PACDMX/59/02/1446/2018 y otro sin número de esa misma fecha, que fue por la petición que formuló el Director de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Tlalpan que se comisionaron a dos elementos del usuario 31874 del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan, del programa prevención del delito con un horario de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro de descanso con la finalidad de inhibir el robo a transeúnte el cual ha sido reportado por los vecinos de las colonias Primavera y Lomas de Padierna, quienes realizan recorridos constantes por esas colonias 'así como para verificar que los sellos puestos en el predio de la Manzana noventa lotes dos y tres no han sido violados', comisión que

únicamente duró tres días. (fojas 872 a 875). --- Sin embargo, mediante la inspección judicial ordenada de oficio por este juzgado en auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, con la finalidad de que alguno de los actuarios adscritos diera fe de si en los lotes referidos se encontraba algún letrero, lona o sello (fojas 712 a 714), misma que fue practicada el siete de agosto de dos mil dieciocho, en la que el actuario judicial dio fe de que al constituirse en los lotes dos y tres de la Manzana noventa, ubicados en Boulevard o Carretera Picacho Ajusco, en la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, observó que había aproximadamente ocho sellos rotos que sólo se alcanzaba a apreciar en su texto la leyenda 'suspensión de actividades' y que estaban colocados en las bases de dos espectaculares de publicidad, de lo que se colige que si bien se encontraban algunos sellos rotos, no fue con motivo de las diligencias que reclama el quejoso, sino en relación con los anuncios espectaculares que mencionó el actuario, de lo que se desprende la inexistencia de los sellos reclamados por el quejoso de las autoridades responsables mencionadas. --- Así también el Jefe del Sector Padierna de la Policía Preventiva en la Delegación Tlalpan de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (en su denominación actual), al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistentes en la ejecución de la orden de desalojo y lanzamiento así como la demolición de algunas estructuras que se encontraban en los predios que defiende el quejoso por esta vía, en diligencia de catorce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 239 a 243); negativa que se corrobora de la lectura del acta de esa misma fecha, en la que no se desprende su participación, sino que se advierte que en la misma actuaron el Jefe de la Unidad Departamental de Ejecución de Sanciones de la Subdirección de Verificación y Reglamentos de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan en conjunto con servidores públicos adscritos a las Direcciones Generales de Administración, Participación Ciudadana y de Servicios Urbanos, así como personal operativo, vehículos y maquinaria utilitarios de la Alcaldía citada, y diversos oficiales de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esa Alcaldía, más no éste de manera específica. --- No pasa inadvertido para esta juzgadora que como se mencionó, sí actuaron en la diligencia mencionada diversos oficiales de la Dirección de Seguridad Ciudadana, y que del desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de los atestes ofrecidos por el quejoso se desprende que también actuaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (en su denominación actual), sin embargo, no el titular de dicha dependencia, por lo que los actos reclamados tanto al Secretario de Seguridad Ciudadana como al Jefe del Sector Padierna de la Policía Preventiva en la Delegación Tlalpan de la Secretaría mencionada son inexistentes. --- Por lo anterior, los actos que se les reclaman son inexistentes y, en consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los mismos. --- QUINTO. Existencia de actos. Son ciertos los actos reclamados al Director General Jurídico y de Gobierno en la Alcaldía Tlalpan, consistentes en: --- a) La emisión del oficio número DT/DGJG/5889/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el expediente administrativo número 020/RPDP/2017, mediante el cual se requirió al o los ocupantes, poseedores, tenedores o responsables de la posesión del predio ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, predio localizado en las

coordinadas que ahí se especifican, para que en el término de cinco días acreditara o acreditaran ante ese órgano político, mediante justo título, la calidad en la que se encuentra o encuentran en posesión del citado predio, con justo título, o en su caso de no contar con justo título, proceda o procedan a la devolución del mismo, apercibido o apercibidos que de no hacerlo, se iniciaría el procedimiento de recuperación de predio de dominio público (foja 28 del primer legajo de pruebas); --- b) La emisión del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete dictado en el expediente administrativo 020/RPDP/17, en el que se hizo efectivo el apercibimiento dictado en el diverso oficio de nueve del mismo mes y año, determinando iniciar el procedimiento de recuperación del predio del dominio público ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, con las coordenadas que ahí se especifican, citando a los ocupantes y/o poseedores, y/o tenedores, y/o responsables de la posesión del predio citado a la audiencia de ley, de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos (fojas 33 y 34 del primer legajo de pruebas). --- c) La emisión de la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete en el expediente 020/RPDP/2017 (fojas 77 a 82 del primer legajo de pruebas). --- Lo anterior, a pesar de que dicha autoridad negó dichos actos al rendir su informe justificado (fojas 176 a 183), pues señaló que al realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos de esa dependencia no se encontró procedimiento alguno instaurado en la dirección Carretera Picacho Ajusco, Manzana 90, lotes dos y tres de la colonia Lomas de Padierna, sin embargo, la existencia de los actos que se le reclaman se desprenden de la lectura de las respectivas constancias que forman parte de las copias certificadas del expediente 020/RPDP/2017 y que obran en un legajo de pruebas por separado, por lo que se tiene por ciertos dichos actos. --- Por otra parte, el Jefe de la Unidad Departamental de Ejecución de Sanciones adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, al rendir su informe justificado (fojas 1122 a 1125) negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistentes en la ejecución de la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete dictada en el expediente 020/RPDP/2017, mediante la diligencia de ejecución de catorce del mismo mes y año, sin embargo, de la lectura del acta de esa fecha se desprende que sí tuvo participación en la misma, por lo que se tiene por cierto dicho acto (fojas 87 a 91 del primer legajo de pruebas). --- Así también César Fonseca Bárcena, notificador adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan, al rendir su informe justificado (fojas 1121 a 1125) negó los actos que se le atribuyen consistentes en: --- 1. La emisión del citatorio de diez de agosto de dos mil diecisiete relativo a la notificación del oficio DT/DGJG/5889/2017 de nueve del mismo mes y año. --- 2. La emisión del instructivo de once de agosto de dos mil diecisiete, relativo a la notificación del oficio DT/DGJG/5889/2017. --- 3. La suscripción del citatorio de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete relativo a la notificación del auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente administrativo 020/RPDP/17 en el que se da inicio a dicho procedimiento administrativo. --- 4. La emisión del instructivo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, relativo a la notificación del auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente administrativo 020/RPDP/17. --- Sin embargo, dichos actos son ciertos, como se desprende de la lectura de los mismos que obran en el primer legajo de pruebas por separado (fojas 31, 32, 36 y

37). --- A todas las documentales referidas se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. --- Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, en la Quinta Época, que establece: --- 'DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. (se transcribe).' --- Por otra parte, también es cierto el acto reclamado consistente en la sustracción del vehículo de transporte marca Dodge, color rojo, con rótulos de 'Grúa Moy', atribuidos de los elementos adscritos a la Policía Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues aunque el titular de esa dependencia negó dichos actos al rendir su informe justificado fue omisa en aceptar o negar su existencia respecto de sus elementos, y que del acta de ejecución de la resolución del procedimiento administrativo de catorce de septiembre de dos mil diecisiete no se desprende la sustracción del vehículo mencionado, su existencia se acredita con las manifestaciones vertidas por los testigos ofrecidos por el quejoso, de las que se desprende que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (actual Secretaría de Seguridad Ciudadana) los que sustrajeron el vehículo en comento de los predios que por esta vía defiende el impetrante. --- A las testimoniales en comento se otorga pleno valor probatorio de conformidad con el principio de sana crítica, con fundamento en los artículos 197 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo pues los dos testigos coinciden en sus testimonios en que fueron elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes sustrajeron la grúa señalada, esto es, no existe contradicción en sus declaraciones. --- Además, se considera que los testimonios referidos cumplen con la característica de precisión, en relación a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos declarados, pues también coinciden en la fecha en que se llevó a cabo la sustracción del vehículo mencionado, así como los hechos que estaban ocurriendo en esos momentos, y la forma en que éstos sucedieron. --- Resulta aplicable la tesis aislada II.1o.A.24 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página: 1558, que al efecto se transcribe: --- 'TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA SANA CRÍTICA. (se transcribe).' --- SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia fundadas. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados cuya certeza se acreditó, procede el análisis de las causas de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan oficiosamente, toda vez que son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. --- La suscrita advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la sustracción del vehículo de transporte marca Dodge color rojo con rótulos de 'Grúas Moy', llevada a cabo en la diligencia de catorce de septiembre de dos mil diecisiete relativa al expediente administrativo de recuperación de predio número 020/RPDP/2017 por elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, adscritos a la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo,

pues el quejoso no acredita el interés jurídico respecto de dicho vehículo, ya que no comprobó ser titular del mismo. --- Para verificar si se actualiza la mencionada causa de improcedencia respecto del acto reclamado referido, cabe destacar que del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. --- De ese modo, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. --- De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, rubro 'INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.'. --- Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto al de los demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. --- Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. --- Por ello, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. --- Sustenta lo anterior, la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: --- 'INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. (se transcribe).' --- De lo hasta aquí expuesto, debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que presentan diferencias substanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. --- Ciertamente, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. --- De lo reseñado, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho

subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los tribunales de la federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. --- En la especie, el quejoso señala como uno de los actos que reclama la sustracción del vehículo de transporte marca Dodge color rojo con rótulos de 'Grúas Moy', llevada a cabo en la diligencia de catorce de septiembre de dos mil diecisiete relativa al expediente administrativo de recuperación de predio número 020/RPDP/2017 por elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, sin embargo, no exhibió documento alguno con el cual comprobara ser propietario de dicho vehículo, por lo que no acreditó su interés jurídico. --- Por lo que al resultar fundada la causa de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado mencionado, de conformidad con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. --- SÉPTIMO. Análisis de las causas de improcedencia infundadas. --- Las autoridades responsables de la Alcaldía Tlalpan y la Jefa de Gobierno, señalan que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues señalan que el quejoso no acredita su interés jurídico, en específico la última autoridad citada señala que con el documento que exhibió el impetrante consistente en el contrato de cesión de derechos de propiedad de fecha cierta, no lo acredita, pues el mismo no puede ser de fecha cierta al no haber sido realizado ante fedatario o funcionario público autorizado además de que no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad. --- Respecto a qué se entiende por interés jurídico e interés legítimo, se tienen por reproducidos los razonamientos vertidos en el considerando que antecede. --- Ahora bien, el quejoso acude al presente juicio de amparo como propietario de los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, y para acreditar su interés jurídico exhibió copia certificada del contrato de cesión de derechos en propiedad de dichos lotes, contrato que fue celebrado por una parte, por el señor [REDACTED] en su calidad de cedente, y por otra parte el quejoso, en su calidad de cesionario o adquiriente de los mismos (fojas 17 y 18), mismo que fue certificado por la Secretaria de Acuerdos 'B' del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, quien en la certificación señaló que las mismas concuerdan con las copias certificadas que obran en los autos del expediente 1532/2010 relativo al juicio ordinario civil promovido por [REDACTED] contra de Fama Montañesa, sociedad anónima de capital variable. --- Así también exhibió copias certificadas de la diligencia llevada a cabo el veinticinco de septiembre de dos mil quince en el expediente señalado, de la que se desprende que el secretario actuario adscrito al juzgado mencionado, en compañía de Braulio Héctor Ocampo Martínez, se constituyeron en el domicilio ubicado en los lotes dos y tres de la mañana (sic) noventa, fracciones de lote de terreno ubicadas en la carretera Picacho Ajusco, antes camino del Periférico al Ajusco de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de doce de marzo y trece de agosto, ambos de dos mil quince, relacionados con la sentencia definitiva dictada el veintitrés de mayo de dos mil once en dicho juicio, poniéndolo en posesión

material y jurídica de dichos lotes (fojas 19 y 20). --- De lo anterior se advierte que el actor en el juicio civil 1532/2010 del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México es [REDACTED] y que éste fue puesto en posesión material y legal de los predios que por esta vía defiende el quejoso, a quien le cedió los derechos de propiedad de los mismos, mediante contrato celebrado el ocho de febrero de dos mil ocho, con fecha cierta de siete de octubre de dos mil dieciséis. --- Ahora, al respecto, es de destacarse que en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que se inscriba en un registro público, o bien, desde la fecha en que el documento sea presentado ante un funcionario público en el ejercicio de sus funciones que de fe del acto celebrado y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes; de ahí que si no se actualizan estos supuestos el documento carece de valor probatorio. --- Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo II, página 768, que se transcribe a continuación: --- 'DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. (se transcribe).' --- Del contrato en mención, tenemos que éste adquirió fecha cierta a partir de que fue certificado por la Secretaría de Acuerdos 'B' del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, quien de conformidad con la fracción VI del artículo 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia tiene como una de sus obligaciones la de expedir copia autorizadas. --- El artículo en comento dispone lo siguiente: --- 'Artículo 58. (se transcribe).' --- En ese orden de ideas, si la documental privada consistente en el contrato de cesión de derechos de propiedad de los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México fue certificado el siete de octubre de dos mil dieciséis (foja 20), entonces tenemos que es a partir de ahí cuando adquirió fecha cierta, y si los actos reclamados se actualizaron en el año dos mil diecisiete, esto es, posteriormente a la certificación del contrato en comento, se desprende que el quejoso sí acredita el interés jurídico que tiene sobre los lotes señalados. --- Cabe precisar que la fecha cierta del documento exhibido es sin prejuzgar sobre la eficacia del mismo en el procedimiento natural, pues el reconocimiento de la existencia de la causa generadora de la propiedad solamente es para el efecto de tutelar el derecho de audiencia previa en el mismo, mientras no se le oiga y venza en dicho procedimiento, ya que la subsistencia de ese derecho puede ser materia de litigio en el juicio ante la autoridad, quien deberá velar por que se cumpla con el debido proceso legal; esto es, el derecho de propiedad que aquí se ha reconocido y tutelado, puede ser extinguido en la vía ordinaria y conforme a la acción que proceda; sin que el hecho de que ese interés jurídico esté demostrado para los efectos del amparo, exima a la autoridad de instancia para que, en su caso, analice la validez, legalidad y eficacia del documento aludido. --- Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis aislada II.1o.18 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro

29, abril de 2016, tomo III, página 2313, que es del tenor literal siguiente: --- **'INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA ACREDITARLO CON UN DOCUMENTO PRIVADO, SE REQUIERE QUE ÉSTE SEA DE FECHA CIERTA.** (se transcribe).' --- Por lo anterior, no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. --- **OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. A continuación se procede al estudio de los motivos de queja constitucional establecidos en los escritos inicial y de ampliación de demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran; siendo aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: --- 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** (se transcribe).' --- En el presente asunto, al reclamar el quejoso la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo 020/RPDP/17, procede la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al tratarse de una violación evidente en el procedimiento, que repercute en la vulneración de sus derechos humanos contenidos en el artículo 1o. constitucional. --- Inclusive es criterio sostenido del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la falta, o bien, el deficiente emplazamiento del demandado en un procedimiento constituye una de las violaciones más graves al procedimiento, que autoriza incluso la suplencia de la deficiencia de los motivos de queja constitucional. --- En efecto, tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de 2000, página 22, de rubro y texto siguientes: --- **'SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.** (se transcribe).' --- Esta jurisprudencia es aplicable pues el supuesto establecido en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo abrogada coincide con la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor. --- También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (IX Región)10.4 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de la Novena Región, visible en la página 2084 del libro 19, junio de 2015, tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe establece: --- **'EMPLAZAMIENTO. LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO, EN EL SENTIDO DE QUE EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ILEGALIDAD O FALTA DE DICHA DILIGENCIA, OBLIGA AL JUEZ DE AMPARO A ANALIZARLO ATENDIENDO A LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA MATERIA.** (se transcribe).' --- Cabe precisar que el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento administrativo 020/RPDP/17 del que derivan todos los actos reclamados, pues manifiesta que no fue emplazado al mismo. --- Para determinar lo fundado o infundado del concepto de violación en estudio, resulta necesario traer a cita el artículo constitucional que la parte quejosa estima violentado, el que en la parte que interesa, textualmente señala: --- **'Artículo 14.** (se transcribe).' --- El numeral transcrito consagra el derecho que la doctrina y la jurisprudencia denominado como de seguridad jurídica, pues

establece todas aquellas condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que deben sujetarse las autoridades para generar una afectación válida en la esfera jurídica de un gobernado. --- En efecto, el numeral en cita constituye, sin lugar a dudas, una garantía de seguridad jurídica a favor de los gobernados, de acuerdo con la cual, para que proceda la privación de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, es necesario que medie un procedimiento en el que el afectado, después de ser oído, resulte vencido. --- Cabe señalar que el derecho público subjetivo en cuestión y la forma en la que se plasma en el texto constitucional, no debe interpretarse de una forma estricta sino atendiendo al sistema que integra, por lo que la garantía de audiencia se colma siempre y cuando el gobernado tenga la oportunidad de defenderse de todo acto de privación proveniente de la autoridad, aunque no sea a través de un juicio ante un tribunal propiamente dicho, pues no debe pasar desapercibido que dentro del sistema de división de poderes adoptado por nuestro régimen primario, es posible que órganos formalmente diversos a los judiciales, efectúen actividades jurisdiccionales. --- Lo que resulta incuestionable es que la garantía de audiencia reconocida en el texto de la Carta Magna intenta proteger la esfera jurídica de los gobernados ante arbitrariedades en las que fácilmente puede incurrir la autoridad en razón de la posición que guarda dentro de las relaciones de supra-subordinación que sostiene con aquéllos. --- A su vez, en el numeral transcrito se prevé como derecho de legalidad a favor de los gobernados el que las sentencias del orden civil (término que comprende toda resolución que no sea de orden penal dictada por autoridades que ejerzan facultades jurisdiccionales) sean dictadas conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. --- A mayor abundamiento y en relación con el contenido del precepto constitucional transcrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los criterios siguientes: --- La jurisprudencia 47/95, sustentada por el Pleno, publicada en la página 133, del tomo: II, diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto informan: --- 'FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. (se transcribe).' --- La tesis emitida por el Pleno, visible en la página 15, del volumen: 115-120, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: --- 'AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. (se transcribe).' --- Como se aprecia, el precepto constitucional transcrito fue interpretado por el Alto Tribunal en el sentido de que la garantía de previa audiencia consiste en que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: --- a) Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; --- b) Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; --- c) Se le dé la oportunidad de formular alegatos; y, --- d) El dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. --- Para una mejor comprensión de los actos reclamados, se estima necesario relatar los antecedentes de los mismos, siendo los siguientes: --- 1. El Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan emitió el oficio número

DT/DGJG/5889/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente administrativo número 020/RPDP/2017, mediante el cual se requirió al ocupante o a los ocupantes, poseedores, tenedores o responsables de la posesión del predio ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, predio localizado en las coordenadas que ahí se especifican, para que en el término de cinco días acreditara o acreditaran ante ese órgano político, mediante justo título, la calidad en la que se encuentra o encuentran en posesión del citado predio, con justo título, o en su caso de no contar con justo título, proceda o procedan a la devolución del mismo, apercibido o apercibidos que de no hacerlo, se iniciaría el procedimiento de recuperación de predio de dominio público (foja 28 del primer legajo de pruebas). --- 2. Ángel César Fonseca Bárcenas, notificador adscrito a la Dirección Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, actualmente Alcaldía Tlalpan, signó el citatorio de diez de agosto de dos mil diecisiete relativo a la notificación del oficio DT/DGJG/5889/2017 de nueve del mismo mes y año, así como el instructivo del día once del mismo mes y año (fojas 31 y 32 del primer legajo). --- 3. Toda vez que no se desahogó el requerimiento formulado mediante oficio DT/DGJG/5889/2017, el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que emitió el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete en el expediente administrativo 020/RPDP/17, determinando iniciar el procedimiento de recuperación del predio del dominio público ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, con las coordenadas que ahí se especifican, citando a los ocupantes y/o poseedores, y/o tenedores, y/o responsables de la posesión del predio citado a la audiencia de ley, de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos (fojas 33 y 34 del primer legajo de pruebas). --- 4. El auto en comento fue notificado mediante citatorio e instructivo de veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete respectivamente, por Ángel César Fonseca Bárcenas, notificador adscrito a la Dirección Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, actualmente Alcaldía Tlalpan (foja 36 del primer legajo de pruebas). --- 5. Seguido que fue el procedimiento, el Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan, dictó resolución el once de septiembre de dos mil diecisiete en la que resolvió procedente la vía de recuperación de predio del dominio público respecto del predio ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, localizable en las coordenadas que ahí se señalan, por lo que ordenó la recuperación inmediata de dicho predio (fojas 77 a 82 del primer legajo de pruebas). --- 6. En cumplimiento a la resolución mencionada en el párrafo que antecede, el catorce de septiembre de dos mil diecisiete se llevó a cabo la recuperación física del predio ahí mencionado (fojas 87 a 88 del primer tomo de pruebas), y ese mismo día se procedió a realizar el acta administrativa de entrega-recepción física del predio en comento, entregándose el mismo al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, por la Dirección General de Administración, para su custodia y preservación (fojas 89 a 91 del mismo legajo). --- Cabe precisar que el quejoso reclama entre otros actos la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo 020/RPDP/17, sin embargo, antes de emitirse el auto que determinó su inicio, el Director General Jurídico y de

Gobierno de la Alcaldía Tlalpan dictó el oficio número DT/DGJG/5889/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el que de primera instancia se requirió al ocupante o a los ocupantes, poseedores, tenedores o responsables de la posesión de predio ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, predio localizado en las coordenadas que ahí se especifican, para que en el término de cinco días acreditara o acreditaran ante ese órgano político, mediante justo título, la calidad en la que se encuentra o encuentran en posesión del citado predio, con justo título (sic), o en su caso de no contar con justo título, proceda o procedan a la devolución del mismo, apercibido o apercibidos que de no hacerlo, se iniciaría el procedimiento de recuperación de predio de dominio público (foja 28 del primer legajo de pruebas). --- Oficio que se notificó a través de citatorio y de instructivo signados por Ángel César Fonseca Bárcenas, notificador adscrito a la Dirección Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, actualmente Alcaldía Tlalpan de diez y once de agosto de dos mil diecisiete respectivamente (fojas 31 y 32 del primer legajo). --- Y toda vez que las personas buscadas no desahogaron el requerimiento citado, el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que emitió el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, determinando iniciar el procedimiento de recuperación del predio del dominio público ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, con las coordenadas que ahí se especifican, citando a los ocupantes y/o poseedores, y/o tenedores, y/o responsables de la posesión del predio citado a la audiencia de ley, de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos (fojas 33 y 34 del primer legajo de pruebas). --- Emplazamiento que fue realizado mediante citatorio e instructivo de veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete respectivamente, por Ángel César Fonseca Bárcenas, notificador adscrito a la Dirección Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, actualmente Alcaldía Tlalpan (foja 36 del primer legajo de pruebas). --- De lo anterior se colige que el inicio del procedimiento se dio en dos momentos, a través del oficio DT/DGJG/5889/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el que se requirió a los ocupantes o poseedores o responsables del inmueble referido para que acreditaran los derechos que tienen sobre el mismo, y a través del auto que dio formalmente inicio a dicho procedimiento, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en el que se les citó para que acudieran a la audiencia del ley, por lo que se considera que para analizar la legalidad del emplazamiento realizado al quejoso en el procedimiento en cita, se deben estudiar las notificaciones de los dos autos referidos. --- Ahora bien, la legislación aplicable para las notificaciones en el procedimiento administrativo de recuperación de predio es la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), vigente en el momento de que se generaron los actos reclamados, que en su artículo 1o. establece que las disposiciones de esa ley tienen por objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México. --- Los artículos correspondientes a las notificaciones en los procedimientos son los siguientes: --- 'Artículo 78. (se transcribe).' --- 'Artículo 79. (se transcribe).' --- 'Artículo 80. (se transcribe).' --- 'Artículo 81. (se transcribe).' --- 'Artículo 82. (se transcribe).' --- 'Artículo 83. (se transcribe).' --- 'Artículo 84. (se

transcribe).’ --- De los artículos transcritos se desprende que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos; y la solicitud de informes o documentos deberán realizarse personalmente cuando se trata de la primera notificación en el asunto. --- Cuando las notificaciones personales se hagan en el domicilio señalado para tal efecto por el interesado o su representante legal, el notificador deberá realizar lo siguiente: --- a) cerciorarse y asentar en la cédula de notificación los elementos que dan certeza de que se trata del domicilio correspondiente, --- b) entregar copia del acto que se notifica y señalar la fecha y hora en que se efectúa la diligencia, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la notificación. --- Si ésta se niega a firmar, se hará constar dicha circunstancia en el acta respectiva, sin que ello afecte su validez, debiendo describir la media filiación de la persona que lo atiende y las características del inmueble. --- Que las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada, con su representante legal, o con la persona autorizada; a falta de éstos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado le espere a una hora fija del día hábil siguiente. --- En el citatorio se asentarán los elementos de certeza que se trata del domicilio buscado y las características del inmueble visitado. --- Si el domicilio se encontrare cerrado; y nadie respondiera al llamado del notificador para atender la diligencia, el notificador deberá volver dentro de los siguientes tres días hábiles al domicilio, en hora diferente de la primera visita. --- Si en la segunda visita no se encuentra a ninguna persona, procederá a fijar en un lugar visible el citatorio. --- Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio, que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, el notificador deberá asentar la media filiación de la persona que lo atiende o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio asentándose las características del inmueble. --- De estas diligencias, el notificador asentará en el expediente, razón por escrito. --- Ahora bien, de la lectura de la razón de nueve de agosto de dos mil diecisiete, relativa a la notificación del oficio número DT/DGJG/5889/2017 (foja 30), se desprende que el notificador Ángel César Fonseca Bárcenas asentó que se constituyó a las diecisiete horas con treinta minutos de esa fecha en el predio ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, predio localizable en las coordenadas que ahí precisó, señalando que encontró cerrado dicho predio y sin nadie que atendiera la diligencia. --- En cumplimiento al artículo 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el notificador mencionado se volvió a apersonar el día siguiente, esto es, el diez de agosto de dos mil diecisiete a las diez horas en el predio señalado, indicando que se constituyó en el mismo de acuerdo con la nomenclatura y los ordenamientos existentes era el indicado para realizar la notificación y que una vez corroborado el domicilio solicitó la presencia del ocupante y/o poseedor y/o tenedor y/o responsable o de su representante legal, sin embargo no se encontró persona alguna, por lo que dejó fijado el citatorio en la entrada principal, señalando que la persona requerida debía esperar a las doce horas del día once del mes y año citados, apercibido que de no atender dicho citatorio, la notificación se entregaría con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encontrara en ese domicilio o en su caso, de encontrarse cerrado,

la notificación se realizaría por instructivo (foja 31 del primer legajo de pruebas). -

-- El notificador mencionado se apersonó el once de agosto de dos mil diecisiete a las doce horas en el domicilio señalado en párrafos anteriores, para notificar el oficio referido y toda vez que no encontró persona alguna ni quien respondiera a su llamado, con fundamento en el artículo 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, fijó el instructivo en el acceso principal consistente en una puerta metálica de color azul con amarillo, asentando que dejó fijado copia de dicho instructivo y del original del requerimiento con apercibimiento. --- De las constancias referidas se desprende que el notificador Ángel César Fonseca Bárcenas no cumplió con las formalidades establecidas en los artículos señalados, por las siguientes razones: --- 1. Cuando se constituyó el día diez de agosto de dos mil diecisiete en el domicilio que refiere, y signó el citatorio correspondiente, no asentó en el mismo de manera adecuada la forma de cómo se cercioró de que fuera el domicilio buscado, sin que baste para cerciorarse de ello, que haya asentado que lo hizo de acuerdo con la nomenclatura y los ordenamientos existentes, pues no especificó a qué ordenamientos se refiere, y además resulta contradictorio que haya señalado que se cercioró por la nomenclatura del inmueble, cuando la dirección son varios lotes, por lo que no resulta congruente lo que asentó en ese citatorio. --- Máxime que de las coordenadas que asentó a mano en el mismo, se desprende que el predio que busca está conformado por diversos lotes, entre los que se encuentran los que por esta vía defiende el quejoso, esto es, los lotes dos y tres de la Manzana noventa, colonia Lomas de Padierna, de la Delegación de Tlalpan de esta Ciudad, lo que se advierte de las manifestaciones realizadas por el Director de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Tlalpan en el oficio número DT/DGJG/DOT/12/2018 de doce de octubre de dos mil dieciocho y que fue remitido en original por el delegado de las autoridades responsables de esa Alcaldía mediante oficio ingresado en la oficialía de partes de este juzgado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (foja 955). --- Sin embargo, en el oficio mencionado si bien se mencionó que acorde al oficio DT/DGJG/6821/2017, de la resolución administrativa dictada en el expediente 020/RPDP/17, se señala que concuerdan cada una de las coordenadas relativas a los predios dos y tres referidos, empero, se precisa que de las coordenadas del dictamen pericial del perito oficial arquitecto Reyes Cruz Torres, existen inconsistencias en el vértice 1-1 y 1, señalando las coordenadas relativas, lo que implica que las coordenadas señaladas en el citatorio mencionado así como en la resolución definitiva, no concuerdan en la totalidad con las de predio del quejoso, por lo que el citatorio reclamado se encuentra viciado, al no contener datos exactos de unos de los predios a recuperar. --- A la prueba pericial rendida por el perito oficial señalado se le otorga pleno valor probatorio en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue realizado por una persona perito en la materia, así como que contestó cada uno de las preguntas formuladas por el quejoso y expuso el método que utilizó para su desahogo así como la razón de su dicho. --- Ahora, en relación al instructivo de once de agosto de dos mil diecisiete signado por el notificador Ángel César Fonseca Bárcenas, el mismo asentó las mismas coordenadas de los predios a recuperar, de las cuales las relativas al lote tres de la Manzana noventa no coinciden con las asentadas en el dictamen pericial del perito oficial rendido en este juicio, como se señaló en párrafos precedente, por lo que el instructivo en

comento, se encuentra viciado al no tener los datos de identificación correctos de dicho inmueble. --- Además, en el instructivo señalado el notificador tampoco asentó de manera clara la manera en que se cercioró de que el inmueble buscado fuera el correcto pues asentó la misma leyenda que en el citatorio, esto es, que lo corroboró de la nomenclatura así como del ordenamiento existente, aseveraciones que se precisó anteriormente, no reúnen los requisitos de los artículos 80 y 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. --- Una vez analizadas las constancias de notificación relativas al oficio mencionado, se procede al estudio de las constancias de notificación relativas al acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento administrativo 020/RPDP/17, consistentes en el citatorio y el instructivo de veintitrés y veinticuatro del mismo mes y año. --- El citatorio y el instructivo de veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente, relativos a la notificación del auto de veintidós del mismo mes y año en el que se ordenó formalmente el inicio del procedimiento administrativo mencionado y se cita a las personas buscadas para la audiencia de ley, adolece de los mismos vicios que los mencionados en los párrafos que anteceden, pues de su lectura se advierte que el notificador Ángel César Fonseca Bárcenas no se cercioró adecuadamente de haberse constituido en el domicilio buscado, así como también en los mismos asentó coordenadas diversas al lote tres de la Manzana 90 de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, que es uno de los lotes que por esta vía defiende el quejoso. --- Aunado a lo anterior, cabe precisar que el quejoso sí acreditó el interés jurídico respecto de los inmuebles que por esta vía defiende con el contrato de fecha cierta que exhibió y que ya fue valorado en esta sentencia, por lo que el actuario mencionado, tuvo que haberlo emplazado al procedimiento citado de forma individual y no de manera colectiva, pues si bien se trata de un solo procedimiento de recuperación de inmuebles, se debe emplazar al mismo de manera independiente a cada una de las personas interesadas, lo que en la especie no ocurrió. --- Lo anterior es así, pues de la lectura de los citatorios y de los instructivos mencionados, los mismos se encuentran dirigidos si bien a diversos lotes con coordenadas precisas, a los poseedores y/o responsables, y/u ocupantes de dichos lotes, cuando debió de emplazarlos de manera individual por ser lotes diversos. --- Por lo anteriormente expuesto, son fundados los conceptos de violación. --- De ahí que al resultar esencialmente fundado el motivo de queja por estar demostrada la violación a las reglas del procedimiento, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. --- Efectos de la sentencia. --- ÚNICO. Que el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, dentro del término de tres días siguientes a que cause ejecutoria la presente sentencia deje insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo 020/RPDP/17, a partir del inconstitucional emplazamiento realizado en las diligencias de diez, once, veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, únicamente respecto de los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. --- Es aplicable a lo aquí considerado la jurisprudencia por reiteración sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, julio de 2005, página 1305, de rubro y texto siguiente: --- 'TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. (se

transcribe).’ --- Finalmente, cabe precisar que no es óbice al dictado de la presente sentencia que la audiencia constitucional fue celebrada por la secretaria en funciones de juez de distrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, párrafo segundo, en relación con el 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque no obstante que de acuerdo con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y el numeral 124 de la Ley de Amparo, en el trámite de la audiencia constitucional rigen los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, de donde se infiere que la sentencia es parte y culminación de dicha audiencia. --- En acatamiento a tales disposiciones y principios, el secretario que haga las funciones de juez de distrito solamente está facultado para dictar la resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello por el Consejo de la Judicatura Federal, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos, aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas. --- Lo anterior tiene sustento, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época, visible en la página 853, cuyo rubro y texto, dicen: --
- ‘SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. (se transcribe).’

SEXTO. El quejoso recurrente expresó como agravios los siguientes:

“1. Causa agravio la sentencia recurrida toda vez que el capítulo de ‘efectos de sentencia’ no es suficientemente claro en precisar las consecuencias de restitución de derechos del quejoso de tales ‘efectos’, ya que el objetivo de la demanda de amparo es de solicitar se conceda la protección de la Justicia Federal, por el cual la garantía constitucional es de proteger el derecho tutelado del aquí quejoso, tal como genéricamente se ordena en el resolutivo segundo de la sentencia combatida, sin embargo en la interpretación de la norma en lo particular al ordenarse judicialmente de dejar insubsistente el procedimiento administrativo 020/RPDP/2017, se omitió precisar que por consecuencia de la insubsistencia del citado procedimiento se ordene la restitución de los derechos que gozaba el aquí quejoso antes de la ejecución del acto reclamado, misma que se incurrió en grave e indebida ejecución realizada por las autoridades alcaldesas de la jurisdicción de Tlalpan, en perjuicio del gobernado aquí quejoso. --- 2. Que como quedó debidamente acreditado mediante los testigos presenciales de los hechos, como lo son [REDACTED] y [REDACTED] z, sin embargo se omitió proporcionar un análisis correspondiente y tener una valuación probatoria de la posesión física de los inmuebles materia del desposeimiento con que contaba el aquí quejoso, ya que como se desprende de la sentencia combatida, se analizó objetivamente el interés jurídico y/o causa generadora de la posesión física y jurídica y que según prudente estimación del órgano jurisdiccional, dicha documental con fecha cierta es eficaz para tener por acreditado el derecho subjetivo del quejoso, por lo que en esas condiciones probatorias, el juzgador, en

su resolutivo de 'efectos de sentencia', es procedente ordenar a la responsable a la restitución de los derechos de posesión al quejoso, con la que contaba antes de la grave e indebida ejecución del acto reclamado. --- 3. Que la resolución de 'efectos de sentencia' al ordenarse de dejar insubsistente el procedimiento administrativo 020/RPDP/17 a los lotes materia del desposeimiento y apercibir a la autoridad responsable, y por consecuencia debió ordenar a las autoridades responsables a 'reintegrar al quejoso en sus derechos afectados', ordenado en un término prudente al cumplimiento de proceder a hacer la devolución de la posesión física, por el cual el quejoso fue despojado desde el 14 de septiembre de 2017, mediante la orden de ejecución del citado procedimiento administrativo ordenado por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación de Tlalpan, hoy Alcaldía de Tlalpan, lo anterior en analogía con la jurisprudencia en el cual apoya su determinación el juzgador (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, julio 2005, página 1305)."

SÉPTIMO. La recurrente en adhesiva expresó los agravios siguientes:

"Al respecto, en los puntos considerando cuarto y primero resolutivo de la resolución aludida, el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, respectivamente, en lo conducente señaló: --- (se transcribe) --- En efecto, el análisis del a quo resulta correcto al sobreseer en el juicio, con respecto a los actos atribuidos a mi delegante, consistentes en: --- •La colocación y resguardo de sellos de seguridad --- En efecto, al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable en cita negó el acto que le reclamó la parte quejosa, sin que ésta hubiese aportado probanza alguna en contrario y, por tanto, al no desvirtuar dicha negativa, no acreditó que mi delegante haya incurrido en el acto omisivo que se le imputó, por lo que deviene en inexistente el mismo; por lo cual, operó la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. --- Lo que se corrobora además de la diligencia ordenada de oficio por el órgano judicial de amparo, consistente en la inspección judicial, a fin de que el actuario de la adscripción diera fe al constituirse en el inmueble materia de la orden de lanzamiento y desalojo de mérito sobre si se encontraba algún sello, letrero o lona, en donde el funcionario judicial en mención dio fe que se encontraron aproximadamente ocho sellos rotos, cuya leyenda en su texto decía: 'suspensión de actividades', colocados en las bases de dos espectaculares de publicidad; por tanto, si bien es cierto que se hallaron 'sellos' rotos o violados en el inmueble de alusión, también lo es que los mismos no corresponden a las diligencias que señala el impetrante en su escrito de demanda, así como tampoco se refieren a los actos que reclamó a mi delegante. --- Por lo que son inoperantes los agravios de la parte quejosa, ahora recurrente, en el sentido de que la sentencia que impugna, en su capítulo o considerando 'efectos de la sentencia', no es suficientemente claro en precisar la restitución de derechos del quejoso, en tanto que el juez a quo debió haberla ordenado a las autoridades responsables, esto es, la devolución de la posesión física del aludido inmueble; pues es evidente que dicha devolución no es un acto que haya reclamado en su demanda de amparo o en su ocurso de ampliación a la misma, además que ello podría ser objeto del ejercicio de una acción real en la vía correspondiente y ante la autoridad competente, y máxime que si algún apartado de la sentencia no le es entendible o

le parece ambiguo u obscuro pudo haber solicitado una aclaración de sentencia, dentro de los tres días siguientes al en que hubiese surtido plenamente sus efectos jurídicos la notificación que se le haya practicado del fallo en comento, conforme a lo señalado por el artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2o. Sin dejar de señalar que la materia del amparo se limitó a la constitucionalidad y legalidad del emplazamiento del procedimiento administrativo número 020/RPDP/2017, habida cuenta que el quejoso se ostentó como tercero extraño al mismo. --- Asimismo, los motivos de disenso que hace valer el recurrente devienen infundados, toda vez que no indica precepto jurídico alguno en que apoye su pretensión y, con respecto al criterio que pretende invocar en su último agravio, es dable señalar que no cumple con lo dispuesto por el artículo 221 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que cuando las partes en una contienda judicial invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes (tesis aisladas), deberán proporcionar los datos de identificación y publicación pues, si bien indica ciertos datos de publicación, lo cierto es que no señala el rubro o título (ni mucho menos texto del criterio) en que pretende apoyar su dicho, a fin de hacerlo identificable y localizable. Lo cual se corrobora con la tesis de jurisprudencia I.5o.T. J/17, sostenida por los tribunales colegiados de circuito, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en el tomo VII, enero de 1998, página 1010, que es del tenor literal siguiente: --- 'JURISPRUDENCIA. SU INVOCACIÓN SIN QUE SE IDENTIFIQUE, LA HACE INATENDIBLE. (se transcribe). --- En consecuencia, resultan inatendibles los argumentos de inconformidad del impetrante de amparo, habida cuenta que no controvierte las partes considerativas de la sentencia, pues únicamente se limitó a afirmar cuestiones que no hizo valer en su oportunidad. --- Sin que pase desapercibido que el recurso de revisión es un medio de impugnación previsto por la Ley de Amparo, en tratándose de amparo indirecto y excepcionalmente en la vía directa, que tiene como finalidad que el tribunal colegiado de circuito correspondiente analice la legalidad de la sentencia emitida por el juez de distrito en la audiencia constitucional, empero no puede abarcar diversas cuestiones, dado que no es propio de un recurso y no se trata de un medio de control de la constitucionalidad como el mismo juicio de amparo; de ahí que ese tribunal ad quem se halle imposibilitado para abocarse al estudio de los agravios en cuestión, puesto que se conducen como si se tratase de una demanda de amparo, cuyo recurrente pretende introducir aspectos novedosos que no hizo valer en el momento procesal oportuno, lo que es impropio de un recurso, como ya se apuntó. --- Apoya a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/59, sostenida por los tribunales colegiados de circuito, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1634, del tomo XVII, marzo de 2003, que lleva como rubro: 'REVISIÓN FISCAL. AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO SE ALEGA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.' --- Por lo que se trata de meras aseveraciones inermes y apreciaciones subjetivas, carentes de todo sustento jurídico. --- Sin que pase desapercibido señalar que el quejoso tiene la obligación de acreditar su interés jurídico, esto es, demostrar al juzgador de amparo que es titular de un derecho subjetivo que se presume ha sido transgredido en su perjuicio por una norma, un acto o una omisión de alguna autoridad, conculcando sus derechos

fundamentales consagrados en la Norma Fundamental, por lo cual la carga de la prueba, ineludiblemente, corresponde a los peticionarios del amparo; de ahí el correcto razonamiento del juzgador de primera instancia. --- Cobra relevancia al caso, la tesis de jurisprudencia VI. 3o. J/26, sustentada por los tribunales colegiados de circuito, correspondiente a la Octava Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, diciembre de 1991, página 117, que es del tenor literal siguiente: --- 'INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. (se transcribe).' --- No omito señalar a sus Señorías, que modificar la sentencia que nos ocupa causaría un agravio a la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, en razón que el quejoso no acreditó la existencia de los actos reclamados a dicha autoridad y, consecuentemente, no se podría estudiar la constitucionalidad de dicho acto, sino únicamente la legalidad de la resolución impugnada, pues a ningún efecto práctico llevaría pronunciarse sobre dichos actos que, como se dijo, con respecto a mi delegante son inexistentes; máxime que la segunda instancia en amparo indirecto únicamente versa sobre la ilegalidad de la resolución que se impugna del juez inferior. --- En consecuencia, este órgano colegiado debe confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio respecto de esta autoridad y por el acto a ella imputado, mismos que ya han quedado precisados. --- Resta decir que la presentación del presente oficio es oportuna aun cuando no se haya admitido la principal por el tribunal colegiado de circuito que en turno corresponda, en función de que no hay restricción expresa alguna por la ley de la materia; ello, de conformidad con el criterio jurisprudencial 1a./J. 39/2019, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el libro 66, mayo de 2019, tomo II, página 863, que es del tenor literal siguiente: --- 'RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL. (se transcribe).''

OCTAVO. No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en los considerandos cuarto y sexto de la sentencia recurrida y reflejado en el resolutivo primero; esto, por no haberse impugnado por la parte a quien pudiera afectar.

Por ende, es **inoperante** el argumento de la recurrente en adhesiva, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, relativo a reforzar el sobreseimiento respecto del acto que se le atribuyó, en razón de que los agravios del quejoso recurrente principal no fueron encaminados a controvertir dicha determinación.

NOVENO. De autos se advierte que el quejoso reclamó diversos actos de distintas autoridades y que la juez a quo sobreseyó en el juicio respecto de las precisadas en los considerandos cuarto y sexto de la sentencia recurrida.

Ahora, cabe precisar que los actos reclamados, tanto en la demanda inicial como en las respectivas ampliaciones, son, en orden cronológico, los siguientes:

1. El emplazamiento realizado en el procedimiento administrativo 020/RPDP/2017, que consta de las siguientes actuaciones:
 - a. El oficio DT/DGJG/5889/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, emitido por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, mediante el cual se requirió al o los ocupantes, poseedores, tenedores o responsables de la posesión del predio ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco sin número, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para que en el plazo de cinco días acreditara o acreditaran ante ese órgano político, mediante justo título, la calidad en la que se encuentra o encuentran en posesión del citado predio, o en su caso, proceda o procedan a la devolución del inmueble, apercibido o apercibidos que de no hacerlo, se iniciaría el procedimiento de recuperación de predio de dominio público.
 - b. El citatorio de diez de agosto de dos mil diecisiete relativo a la notificación del oficio anterior, signado por Ángel César Fonseca Bárcenas, notificador adscrito a la Dirección Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, actualmente Alcaldía Tlalpan.
 - c. Instructivo de once de agosto de dos mil diecisiete, signado por el verificador señalado en el numeral que antecede, relativo a la notificación del oficio de mérito.
 - d. El acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente administrativo en cita por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, en el que se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el diverso oficio de nueve del mismo mes y año, determinando iniciar el procedimiento de recuperación del predio del dominio público materia de la litis, citando a los ocupantes y/o poseedores, y/o tenedores, y/o responsables de la posesión del predio a la audiencia de ley, de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos.
 - e. El citatorio de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete relativo a la notificación del auto anterior, signado por el notificador precisado en el inciso b) anterior.
 - f. Instructivo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, signado por el verificador en cita del numeral que antecede, relativo a la notificación del auto de veintidós de agosto de ese año.
2. La emisión de la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete en el expediente administrativo 020/RPDP/2017, por el Director General Jurídico y de Gobierno en la Alcaldía Tlalpan, por medio de la cual ordenó la recuperación inmediata del predio.
3. La emisión y ejecución por parte de las autoridades ordenadoras, esto es, de la Jefa de la Alcaldía Tlalpan y del Secretario de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México de la orden de desalojo y lanzamiento llevados a cabo el catorce de septiembre de dos mil diecisiete de los predios que por esta vía defiende el quejoso, contenida en la resolución que antecede.
4. La ejecución de la orden de desalojo y lanzamiento precisadas en la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete, así como la demolición de algunas estructuras que se

encontraban en los predios mencionados por parte de las responsables ejecutoras Director General Jurídico y de Gobierno, Director Jurídico, ambos de la Alcaldía Tlalpan, y del Director del Sector Padierna de la Policía Preventiva de esa Alcaldía, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y de Arturo Maya Espinoza, Jefe de la Unidad Departamental de Ejecuciones y Sanciones adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, la cual tuvo verificativo mediante diligencia de catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

5. La sustracción del vehículo de transporte marca Dodge color rojo con rótulos de "Grúas Moy", llevada a cabo en la diligencia señalada en el numeral que antecede por elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, adscritos a la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, y al personal del Director Jurídico dependiente del Director General Jurídico y de Gobierno, y de la Jefa de la Alcaldía Tlalpan.
6. La colocación y resguardo de sellos de seguridad en el predio en litigio por parte de la Procuradora General de Justicia y del Titular de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos de la Ciudad de México.

De la sentencia recurrida se desprende que la juez del conocimiento analizó la legalidad del emplazamiento realizado al quejoso en el procedimiento administrativo 020/RPDP/2017, el cual – señaló– inició en dos momentos: i) a través del oficio DT/DGJG/5889/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el cual se requirió al o los ocupantes, poseedores, tenedores o responsables de la posesión del inmueble materia de la litis para que acreditaran los derechos que tienen sobre éste, y, al no haber encontrado persona alguna en el domicilio, dejó citatorio e instructivo de diez y once de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente; y ii) a través del auto que dio formalmente inicio a dicho procedimiento de veintidós de agosto del citado año, consistentes en el citatorio e instructivo de veintitrés y veinticuatro de agosto del año en cita.

De lo anterior, la juez a quo determinó que las notificaciones realizadas no reúnen los requisitos previstos en los artículos 80 y 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esto, porque dichas diligencias se encuentran viciadas al no tener los datos de identificación correctos del inmueble buscado; asimismo, porque el quejoso acreditó su interés jurídico respecto del inmueble que defiende con el contrato de fecha cierta que exhibió –para efectos de la procedencia del juicio de amparo y del derecho que le asiste a que se respete su garantía de audiencia en el procedimiento natural–, por lo que el actuario debió haberlo emplazado al procedimiento en forma individual.

En consecuencia, la juez de distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan deje insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo 020/RPDP/2017, a partir del inconstitucional emplazamiento realizado en las diligencias de diez, once, veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, respecto de los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Ahora, en los agravios aducidos por el recurrente principal, éste sostuvo que la juez a quo omitió precisar que, por consecuencia de la insubsistencia del procedimiento administrativo 020/RPDP/17, se debe ordenar la restitución de los derechos de los que gozaba al estado en que se encontraban antes del emplazamiento realizado en las diligencias citadas en el párrafo anterior, es

decir, ordenar que se le devuelva la posesión física de los predios materia de la litis, por lo que – insistió– la sentencia recurrida es imprecisa en determinar los efectos del amparo.

Este tribunal colegiado estima **esencialmente fundados** los argumentos del quejoso, de conformidad con las consideraciones siguientes:

La concesión del amparo tiene como efecto inmediato restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas en el estado que guardaban antes de la violación.

Es necesario indicar que, en relación con los efectos que debe darse a la concesión del amparo, el artículo 77 de la Ley de Amparo señala lo siguiente:

“Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales.

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.”

De conformidad con el precepto transcrito, los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo –es decir, cuando implica un “hacer”– consistirán en restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Asimismo, de ese dispositivo se advierte que en el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión sus efectos, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

Ahora, los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto por los cuales la juez a quo no sobreseyó, consisten, como se adelantó en los antecedentes, en el emplazamiento al procedimiento 020/RPDP/17 realizado en las diligencias de diez, once, veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, respecto de los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, respecto de los cuales el quejoso acreditó tener interés jurídico; por tanto, se trata de actos de carácter positivo.

Así las cosas, si la juez determinó conceder el amparo para el efecto de que el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan deje insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo 020/RPDP/2017 a partir del inconstitucional emplazamiento realizado en las diligencias de diez, once, veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, respecto de los lotes señalados en el párrafo que antecede, debe entenderse que esa concesión efectivamente tiene el alcance de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, incluyendo la emisión y ejecución de la orden de desalojo y lanzamiento llevados a cabo el catorce de septiembre de dos mil diecisiete respecto de los predios que defiende el quejoso.

Lo anterior, en el entendido de que, hasta en tanto no se determine la ineficacia del título con el que el quejoso acreditó su interés jurídico para acudir al amparo y demostrar su derecho a ser oído y vencido en el procedimiento administrativo del que deriva el juicio, aquél debe ser puesto en posesión de los lotes que ampara el contrato de cesión de derechos de propiedad de fecha cierta; sin que esta determinación implique prejuzgar sobre su eficacia en el procedimiento natural, sino únicamente restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

En consecuencia, al resultar **esencialmente fundados** los agravios del quejoso ahora recurrente principal, lo conducente es **modificar** la sentencia recurrida y **conceder el amparo** para el efecto de que el Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan deje insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo 020/RPDP/17 a partir del emplazamiento realizado en las diligencias de diez, once, veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, respecto de los lotes dos y tres de la Manzana noventa de la colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, incluida la ejecución de la orden de desalojo y lanzamiento llevados a cabo el catorce de septiembre de dos mil diecisiete respecto de los referidos predios y cualquier otro acto posterior al emplazamiento, y restituya al quejoso en el goce del derecho del bien inmueble en cita, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento sobre los argumentos de fondo propuestos por la autoridad recurrente en adhesiva, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, dado que, al haberse sobreseyó en el juicio respecto de los actos que se reclamaron de ella, aquéllos resultan **inoperantes**.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se **modifica** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **ampara y protege a** [REDACTED] por las razones y para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados: presidente Marco Antonio Cepeda Anaya, ponente José Ángel Mandujano Gordillo y Edmundo Hinojosa Muñoz, secretario en funciones de magistrado por licencia pre-jubilatoria de la magistrada Luz Cueto Martínez, en términos de los artículos 26, segundo párrafo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, autorizado mediante oficio CCJ/ST/5573/2019 de veintidós de octubre de dos mil diecinueve por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el oficio SEPLE./CJD./010/5968/2019 por el que el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Pleno aprobó la licencia pre-jubilatoria de la magistrada Luz Cueto Martínez, del dos de noviembre de dos mil diecinueve al uno de enero de dos mil veinte y su retiro con fecha de conclusión del encargo a partir de esta última fecha; firman los tres primeros citados, con la intervención del secretario de acuerdos quien autoriza y da fe, atento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.